



ACTUALIDAD

1

REFORMISMO CON REFORMAS

Ramón VARGAS-MACHUCA

«Es imposible poner en cala seca el bajel para comenzar el trabajo en debida forma. Así, durante el trabajo tienen que permanecer sobre la vieja estructura, sujetos a los embates de los vientos huracanados y de las encrespadas olas. Paso a paso la vieja embarcación se va convirtiendo en otra nueva. Puede incluso ocurrir que mientras están trabajando en la construcción, los marineros ya estén pensando en otra nueva estructura, sin que puedan ponerse de acuerdo entre sí. Todo este asunto seguirá un curso que nos es imposible anticipar. Ese es precisamente nuestro destino».

Otto Neurath

1. Conciencia de nuestro tiempo y porvenir del reformismo

La década, que había comenzado con sombríos presagios y dando fe del declive de los grandes relatos modernos de emancipación, se despide saludando la libertad recién conquistada por miles de ciudada-

nos que se han sacudido el totalitarismo y su retórica. Es cierto que en algunos de esos lugares, donde se está produciendo la reacción antiautoritaria, predomina todavía la confusión y una situación crítica. Pero ya decía Gramsci que «la crisis consiste fundamentalmente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no

***Las pretensiones proféticas
o estratégicas, y el
aristocratismo del marxismo
como teoría y del comunismo
como moral, resultan hoy
patéticos.***

puede todavía nacer, en este interregno aparece una gran variedad de síntomas morbosos».

Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos atónitos y lo que puede terminar conformando próximamente la conciencia de nuestro tiempo, representa un duro golpe para las pretensiones predictivas de la teoría social y para la soberbia explicativa e inmodestia redentora de los mitos salvíficos de la contemporaneidad. La capacidad de innovación y transformación social va vinculada a los esfuerzos por arreglar y reformar más que a la pretensión de implantar en la tierra «ucronía» alguna. Casi deberíamos aceptar aquella recomendación de Popper de que aprendemos por corrección. Queda en pie, por otro lado, sólo un minimalismo moral apto para homologar de un modo aceptable hábitos, pautas de comportamientos y principios reguladores imprescindibles para hacer básicamente digna la convivencia social. De ahí que hoy tenga sentido lo que preconizaba Otto Neurath como destino del trabajo intelectual y que he transcrito como introducción a estas páginas.

Difícilmente los que nos reclamamos de una cultura de izquierda podremos entender el presente y avanzar propuestas útiles para el futuro si no tenemos el coraje de ajustar cuentas sin tapujos con el pasado intelectual y político de nuestra tradición, reconociendo la naturaleza nefasta de su veta jacobina, responsable del fracaso de los intentos revolucionarios y de las con-

secuencias letales de sus realizaciones programáticas. Las pretensiones proféticas o estratégicas, y el aristocratismo del marxismo como teoría y del comunismo como moral, resultan hoy patéticos. Queda en pie como recuerdo ejemplar de dicha cultura la dignidad de que dotó en muchos casos a los vencidos, la fortaleza o la intransigencia moral con la que reviste a los resistentes. Ciertamente, la cultura de resistencia produce héroes, pero el paternalismo teórico y moral que acompaña a muchos de aquellos resistentes resulta totalitario si se instalan en el gobierno y estéril, por lo común, en las sociedades abiertas.

Los relatos de redención contemporáneos consiguieron deslumbrar a buena parte de la intelectualidad de nuestro tiempo logrando así un extraordinario predicamento en nuestras sociedades complejas. Ello hizo que la mediación política y su capacidad de canalizar intereses perdiese crédito intelectual, se arrinconase el reformismo y se jaleara la demagogia como principal recurso político, despreciándose los niveles mínimos de competencia y profesionalismo requeridos para afrontar la resolución de cualesquiera de los conflictos que surgen en el día a día de nuestros sistemas sociales.

La ligereza con la que muchos intelectuales intervinieron, e intervienen, en los asuntos políticos es, de alguna forma, responsable de esa degradación de la información que existe hoy en buena parte de los medios de comunicación, que prefiere por pereza intelectual el escándalo al análisis de la complejidad, que aturde más que ilustra. Todo esto es, de algún modo, fruto de una manera de entender la cultura política que ha propagado la intelectualidad más influyente de Occidente, desde la posguerra al presente, a la hora de afrontar el análisis y las perspectivas de los conflictos y el cambio sociales. En buena medida la protesta contra el enor-

me vacío de sentido de la sociedad de consumo terminó siendo un vacío todavía mayor.

También la manera como esta intelectualidad occidental ha vivido su relación con las ideologías políticas es causante de la incompreensión del sufrimiento de sus colegas del Este. ¿Por qué, como mínima reparación, no cedemos la palabra, por un tiempo, a los hasta ayer intelectuales disidentes del Este que tengan la oportunidad de reconstruir, ante nosotros, su experiencia de la modernidad, y expliquen cómo sobrevivieron como intelectuales bajo una tiranía que se asentaba sobre una razón totalitaria y el silencio cómplices de la intelectualidad bienpensante de Occidente?

La otra consecuencia, que acarrea el derrumbe del comunismo, el fracaso de las terceras vías así como el desmadejamiento de las confortables trincheras de la resistencia intelectual, es la enorme responsabilidad que recae, hoy, sobre la socialdemocracia, única izquierda capaz de frenar la marea de conservadurismo que pretende dar acogida política a la reacción anticomunista y beneficiarse de la derrota de las pretensiones autoritarias de una razón redentora.

La socialdemocracia, a diferencia de ocasiones anteriores, ha sabido pertrecharse intelectualmente para una ocasión como ésta. Ha ajustado de un modo consecuente sus cuentas con su conciencia pasada y ha realizado una recomposición de su identidad, congruente y sensible a los desafíos de la situación presente. El movimiento socialista democrático no sólo en su práctica, sino también en su teoría, ha sabido romper el vínculo que pretendía identificar lucha contra la explotación con aniquilación del mercado, la propiedad y el consumo privados.

Combatir los sistemas de explotación e intentar eliminar las desigualdades injustas no se identifica con la negación del mercado y la propiedad, ni con la exaltación de una economía centralizada o planificada, sino más bien con la capacidad tanto de ir desmontando la desigual distribución del poder económico, político y cultural como de favorecer un proceso de redistribución de recursos, posibilidades y oportunidades. Para los socialistas democráticos, fue siempre algo sabido que únicamente la democracia podía ocasionar cambios graduales y progresivos en pro de dichos objetivos. Por el contrario, el comunismo revolucionario forjó una metafísica fraudulenta de la cuestión social (Agnes Heller) cuyo seguimiento práctico ha tenido las consecuencias catastróficas que todos conocemos.

La derecha conservadora intenta exportar a los países que desean recuperar su libertad la idea de que las ventajas de la economía de mercado, de las libertades democráticas sólo son transitables en las embarcaciones del liberalismo conservador o incluso dando rienda suelta a toda suerte de fundamentalismo premoderno. Mientras la derecha trafica con las ideas de libertad, economía y mercado para traspasar el contrabando de la lógica de la explotación, corresponde a los socialdemócratas no sólo explicar la incompatibilidad entre socialismo democrático y organización autoritaria de la economía, sino también la idea de que economía de

La socialdemocracia, a diferencia de ocasiones anteriores, ha sabido pertrecharse intelectualmente para una ocasión como la que estamos viviendo.

mercado y legitimación de la explotación —ideología capitalista— no son la misma cosa.

Deben los socialistas democráticos de Occidente llamar la atención de los ciudadanos del Este sobre las nuevas formas de explotación y dominación que pueden aparecer si la instauración de los mecanismos capitalistas de producción o la liberación de sentimientos nacionales, religiosos o culturales no se canalizan a través de instancias que racionalicen las demandas y favorezcan la redistribución de recursos y oportunidades a favor de los peor situados. Por tanto, interpretar desde la socialdemocracia lo que ocurre en el Este es afirmar tanto que todos los modelos autoritarios de emancipación están definitivamente agotados, como que la condición necesaria para la lucha contra la tiranía, la dominación y la miseria es la libertad, y que ésta exige para su ejercicio una organización no autoritaria de la economía y una organización democrática del Estado. Sólo si el Estado es racional, laico, eficiente y, a la vez, articulado conforme a los procedimientos de la ingeniería democrática, existirán condiciones para superar cualquier forma de dominación y la propia miseria de la que los pueblos del Este huyen.

Pero paradójicamente, la anticipación teórica de la que para esta situación la socialdemocracia hace gala no se complace con cierta pasividad política con la que, a mi juicio, está contemplando aún

Deben los socialistas de Occidente llamar la atención a los ciudadanos del Este sobre las nuevas formas de explotación y dominación que pueden aparecer.

los acontecimientos. Es más bien el conservadurismo occidental el que puede terminar imponiendo su impronta. Por ejemplo, las ansias de libertad, el desahogo de los más variados sentimientos religiosos, culturales y nacionales reprimidos durante tanto tiempo pueden conducir a un primitivismo político y a una anarquía de difícil encauzamiento. Sacudirse el yugo de una organización autoritaria de la economía puede trasuntarse simplemente en la creación de mercados cautivos de los grandes intereses económicos internacionales. El asombro por la celeridad de los cambios y la perplejidad ante la rehabilitación de ciertos mitos premodernos puede que expliquen ese *impasse* de la izquierda democrática occidental.

Pero la pasividad o el instalarse en la administración rutinaria de la interacción social son actitudes contrarias al reformismo, y delatan conservadurismo político. El reformismo no tiene en la actualidad competidores alternativos en la izquierda, ni es una opción vergonzante como opción de progreso; por tanto, no quedan excusas para no ser consecuentemente reformista frente a quienes, como los conservadores, entienden la acción política como un medio más de asegurar en favor de unos pocos poderosos el desigual reparto de posibilidades, oportunidades y recursos.

El reformismo representa la conciencia política más estimable de nuestro tiempo, pero, a diferencia del fundamentalismo, no se sustenta de habladurías y, por otro lado, convive mal con los cínicos, porque es sobre todo una virtud posible, al alcance de quienes se proclaman sus adeptos. El reformismo, por naturaleza, invita a la intervención. Trata fundamentalmente de ensayar modelos, programas, iniciativas congruentes con los valores que defiende y sensibles a las demandas que van surgiendo de los ciudadanos. Por sus resultados sabremos de su capacidad. De la apli-

cación de sus propuestas deduciremos su grado de acierto, descubriremos nuevas demandas y detectaremos también las consecuencias no previstas de sus decisiones. Es la única manera de progresar.

De este modo ha sido como el PSOE ha logrado sus mejores éxitos políticos: moviéndose, por ensayo y error. Por tanto, es el balance de lo realizado, el resultado conseguido y la propia concepción del reformismo lo que obliga a situar en el orden del día de las estrategias del PSOE la renovación de las políticas como exigencia y resultado de una nueva situación. Cuando se cuenta con una meritoria iniciativa de renovación en el terreno de los principios y de las grandes orientaciones estratégicas de futuro, no resulta comprensible no ensayar ya programas específicos y sectoriales derivados tanto de aquellos principios generales y de las definiciones estratégicas como de las demandas sociales producidas en la actual coyuntura.

No sé si el movimiento lo es todo «more bersteiniano» pero es un signo crucial del estado de salud de nuestro reformismo. En cualquier caso, si ahora emerge la idea de renovar políticas y renovar la política como exigencia estratégica del socialismo español, es porque una práctica consecuentemente reformista ha dado resultados que transforman en objetivos políticos alcanzables lo que lo hasta ayer eran meros deseos. Ese es el signo de la acción política racionalmente orientada, a diferencia de quienes nunca yerran y nunca tienen que renovarse, porque jamás se exponen a probar la eficacia de sus buenas intenciones.

2. Una década de normalización democrática en España

La década que acabamos de cerrar lleva en nuestro país la impronta del PSOE,

El reformismo no tiene en la actualidad competidores alternativos en la izquierda, ni es una opción vergonzante como opción de progreso.

protagonista de una básica normalización democrática. Y aunque algunos se empeñen en insistir en que los socialistas han acertado en lo que no habían previsto y que han cosechado más aciertos que razones y más razones que buenas formas, ello difícilmente puede empañar una gestión política que se salda bastante positivamente. El sociólogo Alain Touraine lo decía hace unos meses de un modo bastante expresivo: «El PSOE ha sido eficiente y decentemente el agente de la modernización económica y cultural y de la democratización de España. El resultado, cuando los socialistas dejen el poder, será un país completamente transformado».

La clave del éxito de dicha normalización está principalmente en que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles ha aprendido a demandar de la política sólo lo debido, es decir, sólo lo que está al alcance de nuestras posibilidades. Ha entendido, antes y mejor que muchos eruditos y responsables políticos, al menos por lo que se refiere a la cosa pública, que no se puede pretender vivir por encima y más allá de nuestra inteligencia. Así, el repudio a cualquier forma de ejercicio autoritario del poder —tiranía, arbitrariedad y corrupción— es el sentimiento más compartido por los ciudadanos y representa la proyección pública de la estima general por los valores de la libertad y la dignidad individual. Además, la gente espera (de la política) que el sistema económico funcione y que en cualquier caso no se reduzcan drásticamente sus oportu-

La década que acabamos de cerrar lleva en nuestro país la impronta del PSOE, protagonista de una básica normalización democrática.

nidades vitales, que el Estado administre racionalmente sus recursos y, en todo caso, le garantice algunos servicios esenciales y una protección mínima frente al infortunio o el desamparo total. Por último, existe el convencimiento abrumadoramente autoritario de que todos estos propósitos deben tener su cumplimiento en un régimen democrático que garantiza cierto control sobre quien decide en los asuntos públicos y favorece la resolución pacífica de los conflictos. La gente, afortunadamente, no espera excesivamente de la política, no se hace ilusiones, sobre todo, para prevenirse contra las grandes desilusiones. Ha aprendido en fin la lección de las sociedades bien asentadas democráticamente: «Nuestras democracias decepcionan, pero no traicionan» (Sartori).

Tanto la consolidación de este sistema de expectativas y sensibilidades como la capacidad de satisfacción de las mismas por el sistema político definen el grado de normalización democrática. Sea cual fuere el valor que a este proceso de modernización y democratización quiera asignársele, es evidente que ha sido una tarea protagonizada en gran medida por el PSOE. Eso explica que cuente mayoritariamente con la confianza de los ciudadanos. El PSOE, a pesar de su complicada historia política e ideológica, a pesar de las consecuencias del exilio y de su débil implantación al comienzo de la transición, ha sabido, a diferencia del resto de las fuerzas políticas, captar esa demanda popular de normalización democrática y

la ha transformado en reivindicación política, primero, y en programa de gobierno, después. La segunda razón, que explica que esto haya ocurrido así, la expresaba de un modo categórico M. A. Macchiocci hace unos días: «La garantía de democracia del presente son las víctimas del pasado». No cabe duda que una afirmación de esta naturaleza se ha convertido en una contundente lección de la historia contemporánea y que en estos días tiene una enorme actualidad.

El síntoma más próximo de la buena marcha de ese proceso, a pesar de que cierta opinión pública se empeña en contradecir lo evidente, es el resultado de las recientes elecciones generales. Cualquier lectura de dichos resultados electorales realizada con un mínimo de perspectiva prueba la gran estabilidad de las preferencias políticas de los españoles, y confirma la creencia generalizada en los países democráticos de que toda tendencia centrífuga destruye el sistema. Por eso han repartido los votos de la manera como lo han hecho. A estas alturas pueden extraerse algunas lecciones, no ya de las elecciones últimas sino de todo el proceso político reciente, para un más sólido asentamiento del sistema y para el despliegue de una sociedad más abierta, responsable y solidaria.

Reconocer que hemos cubierto satisfactoriamente una etapa no es un ejercicio de autocomplacencia sino aceptar una evidencia que da seguridad. Pero, al mismo tiempo, en el orden del día siguen apareciendo nuevas demandas a las que no se puede responder sólo con la renovación del vestuario ideológico sino transformando la política y las políticas de un modo congruente con el nuevo horizonte estratégico y con los problemas y retos que el ritmo de nuestro desarrollo comporta. Este requerimiento de renovación tiene la intención de huir de un análisis romo. Porque, si el horizonte de nuestra

reflexión no va más allá de la contemplación del estado de las otras fuerzas políticas y del juicio trivial que puede extraerse de los comentarios predominantes en los medios de comunicación, es explicable que la inclinación sea la de no cambiar y, sobre todo, la de dar la sensación de que no se cambia. Es deseable, sin embargo, otra perspectiva menos alicorta, si tenemos en cuenta los retos actuales del reformismo en su soledad presente como única referencia racional de una emancipación política posible, si caemos en la cuenta de que orientaciones estratégicas que sugieren iniciativas como las del *Programa 2000* no pueden esperar para su realización una década, sino que son reclamaciones del presente.

Una transformación de la sociedad española como la que se está produciendo produce externalidades negativas, algo inevitable pero corregible: algunas desviaciones perversas del ejercicio del poder público, excesivas y rápidas concentraciones de poder económico y, a la vez, consolidación de bolsas de marginación y pobreza. Registrar estas realidades negativas y situarlas como prioridad de la agenda política desemboca en un impulso que renovará el aire, que inundará el día a día con gestos, iniciativas y hábitos, fruto de una política renovada.

A diferencia de quienes sostienen que rectificar en algún grado supone un riesgo y que mantener sin modificación alguna rumbo y velocidad es un factor de seguridad a la vista de la confusión que nos rodea, creo, más bien, que para responder a la nueva situación y a las nuevas demandas deben introducirse algunas correcciones. Además, una política guiada por objetivos y prácticas desincentivados ideológicamente puede ser reclamada por cualquier formación política, como así está sucediendo. La indiferencia que ello alimenta entre los ciudadanos sólo podrá ser alertada en un futuro por la curiosidad de

ver cómo representarán la misma música otros compositores. No es otra cosa lo que desde un tiempo a esta parte viene jaleando en la opinión pública una buena parte de los medios de comunicación, incitando permanentemente a la formación de un frente común de toda la oposición sin otro norte que el de descabalar al Partido Socialista. Una insistencia rutinaria que no se combate con la rutina sino con la renovación.

3. Robustecer la cultura política

Si bien el balance de la democratización, realizado con perspectiva, es bastante satisfactorio, todavía no se han desarrollado suficientemente en la sociedad española unos hábitos congruentes con los modelos institucionales, económicos y políticos y con el sistema de creencias que acepta la mayoría de los españoles y que forma parte de su requerimiento difuso a la política. El rodaje democrático nos ha puesto ante la evidencia de una cultura política democrática bastante endeble, cuya consecuencia más preocupante sería que el pacto constitucional pudiera fragilizarse, justamente al ponerse en cuestión creencias, lealtades básicas y hábitos compartidos, que son las razones que le dan sentido. Eso quizá explique el clima algo confuso de la vida política en los últimos meses, que en ocasiones parece retrotraernos varios años atrás. Esa pérdida, momentáneamente espero, de complicidad básica del bloque democrático hace que, a pesar de los elocuentes resultados

Reconocer que hemos cubierto satisfactoriamente una etapa no es un ejercicio de autocomplacencia sino aceptar una evidencia que da seguridad.

electorales, la oposición se empecine en un frente común anti-PSOE, como única estrategia, y martillea a la opinión pública con la consigna de la radical perversión política y moral del gobierno socialista, que no es que conduzca bien o mal la gobernación del país —eso no importa—, sino que es radicalmente corrupto; sin que, por otra parte, esos predicadores de la honradez tengan el pudor elemental de preguntarse cómo tienen ellos sus propios traseros.

Pero a esa atolondrada estrategia puede que el PSOE quiera responder al grito de «no nos moverán», el más comprensible de los reflejos, aunque no el más sabio. Por el contrario, pienso que hay que tomar ofensivamente la iniciativa, fundamentalmente para recuperar la solidez del consenso constitucional y la dignidad debida a la acción política entre los ciudadanos. La primera y más fundamental de estas iniciativas es alentar en la sociedad española el desarrollo de la cultura política democrática. A ello me referiré a continuación.

Público y privado

Como se sabe, la experiencia puritana, la reforma protestante y una bien consumada revolución burguesa estimularon en otros países el espíritu de empresa y el asociacionismo voluntario. Alimentaron la confianza en la responsabilidad y la iniciativa individual o libremente concer-

***Hay que tomar la iniciativa
para recuperar la solidez
del consenso constitucional
y la dignidad debida a la
acción política entre los
ciudadanos.***

tada más que en un Estado sujeto de responsabilidad universal del que se espera y se demanda todo y cuya aceptación o rechazo termina convirtiéndose en absoluto. En nuestro país, sin embargo, no floreció este espíritu de la modernidad ni un sentido secular que abonaran una tradición proclive a separar el reino de Dios y el del César, moral y política, esfera privada y pública, Gobierno y Estado, actores sociales y fuerzas políticas. Este «déficit» hace, por ejemplo, que la educación orientada a reparar esas lagunas deba ser una matriz de ciudadanía, una posibilidad de que surjan individuos responsables, que no entiendan lo público como *res nullius* o como una fuente más de aprovechamiento privado. Si no se tienen en cuenta estas carencias difícilmente se entendería por qué el discurso predominante sobre la política es el que es en España, y cuáles son las limitaciones que el desarrollo de la democracia tiene en nuestro país.

En un contexto donde una buena parte de la opinión frivoliza la vida pública, convirtiendo en referencia trascendental de la misma los asuntos privados de las personas públicas, es bueno recordar, como hacía Francisco Laporta hace unos meses, que la distinción entre moralidad privada y moralidad pública es una conquista emancipadora e ilustrada y que es profundamente reaccionario arrojar como arma política la losa de los prejuicios morales imperantes sobre la vida privada de los hombres públicos. No es algo racional, sino pura beatería inquisitorial el reproche moral, la presión de la opinión, la sanción pública de los comportamientos privados de las personas públicas.

Retóricos y cínicos

Tras unos años de inflación de habladurías éticas en la política, de lo cual han sido muy responsables los propios socialistas, siento la necesidad de reclamar la

necesaria separación entre discurso moralista y política moralmente orientada como antídoto frente al demagogo y al pragmático sin escrúpulos y como exigencia de una cultura democrática.

El abuso del discurso ético alimenta como razón de la política la demagogia, que sustituye el conocimiento de lo complejo por el juicio indocumentado. La demagogia se pretende original sabiendo poco, sustituye la innovación por la exageración y el escándalo, no repara en las consecuencias y en los costes de las decisiones que propone e invita a la irresponsabilidad generalizada. Si las declaraciones de principios y las buenas intenciones inundan la política, ésta se convierte en una guerra de palabras, venciendo quien sea más hábil a la hora de apropiarse las buenas y descargar las malas en el campo ajeno. Al final ese vuelo al cielo de las palabras éticas que caracteriza cierto modo de hacer política favorece la extensión de la epidemia de la doble moral y la hipocresía social. A ello se añade el que grandes especialistas, tratándose de asuntos de interés público, razonan, paradójicamente, de un modo completamente infantil, lo que considerarían impedornable en el área de su competencia profesional.

En fin, tomar prevenciones frente a los excesos del discurso moralista en política ayuda a que el demagogo, animal político por definición, no encuentre en la extrapolación oportunista del razonamiento contrafáctico o transcendental del intelectual el recurso privilegiado de su habilidad política. Y, sobre todo, elimina la gran coartada de los verdaderos enemigos de una acción política moralmente orientada, los cínicos de nuestro tiempo. Ellos son tanto los hiperidealistas que niegan todos los hechos como los hiperrealistas que han renunciado a cualquier resquicio de idealidad. Unos y otros desconfían absolutamente del valor de la mediación política y de su capacidad para canalizar

La demagogia se pretende original sabiendo poco, sustituye la innovación por la exageración e imita a la irresponsabilidad generalizada.

distintos intereses. Como Antístenes, creen que a la política «hay que acercarse como al fuego: no demasiado para no quemarse, ni apartarse mucho para no helarse». Para los representantes en la actualidad de la «secta del perro» la política es sólo administración económica, diplomacia y retórica. Para los pragmáticos a ultranza la retórica es una coartada, un ritual de la política, mientras que para los superidealistas la retórica es el medio para expresar su fundamentalismo en favor del género humano y en perjuicio de los humanos concretos, así como su desprecio hacia los resultados de la tensión entre lo ideal y lo posible y de la transacción entre interés general y particular, en fin, hacia todo lo que puede desarrollar un orden político consecuentemente democrático.

La ley por encima de los hombres

Como expresaba más arriba, la acción política en tanto que acción racional y democrática tiene sus propios principios y sus propias exigencias. Es, quizá, lo contrario al «ethos político» que Hegel teorizó y que ha significado jugar con fuego, legitimar en nombre de la realización de un principio moral tiranías terribles, como estamos teniendo ocasión de comprobar en estos días y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este siglo. Propugnamos, por tanto, una moral empotrada en la propia política. Se pretende, sobre todo, que las prescripciones y hábitos de la política destilen aprecio por los

La acción política en tanto acción racional y democrática tiene sus propios principios y sus propias exigencias.

valores registrados en las Constituciones democráticas, y respeto a los procedimientos y a las leyes, de las que nos dotamos, expresión reglada de nuestras aspiraciones y posibilidades.

La constitucionalización de los derechos, el garantismo constitucional y el gobierno de las leyes representan la única forma conocida de ir construyendo un sistema político no despótico, democráticamente controlado, pluralista y en condiciones de cimentar una moral pública sensible al despliegue progresivo de un ideal emancipatorio, el de la libertad igualitaria. Todo impulso en pro de la realización de ese ideal genérico debe producirse teniendo a la democracia como virtud ciudadana y colocando a la ley por encima de nuestra percepción particularizada de los intereses morales. En definitiva, el gobierno de las leyes sobre el de los hombres. Como decía Rousseau, cuando los hombres se sitúan por encima de la ley no quedan más que esclavos y amos.

Cuando apelamos al aprecio progresivo del principio de legalidad como medio eficaz para robustecer la moral cívica y el consenso constitucional que políticamente la define, lo hacemos conociendo también los peligros más usuales que se producen en relación con el principio de legalidad. Uno, actuar como si este principio se agotara en la expresión de la voluntad de la mayoría o del legislador ordinario. Otro, el que los jueces y operadores jurídicos actúen en la práctica como

hacedores de las leyes. Lo razonable y lo que permite al ciudadano saber a qué atenerse es, ante todo, el gobierno de los legisladores, aunque con las limitaciones que nuestra arquitectura institucional establece: una, referida al respeto escrupuloso del procedimiento de elaboración de las leyes (iter legislativo); otra, el suelo y el techo de las prescripciones constitucionales, y, por último, el control judicial cuya autoridad se refuerza ante todo por la solvencia de su razonamiento jurídico.

No mucho más pretendo aquí cuando postulo una política moralmente orientada y, desde luego, no la politización de los trascendentales morales. En realidad se trata de que la gente argumente racionalmente sus preferencias, y que procure la realización de aquéllas acomodándose a las exigencias y procedimientos de una legalidad cabalmente democrática cuyo perfeccionamiento y desarrollo es condición de posibilidad y garantía indispensable del progreso moral de una sociedad.

Sólo de este modo se amortigua el amoralismo político que se atrinchera tras la sofocracia de los tecnócratas, dogmatismo tan ideológico al menos como el de sus contrarios, los retóricos de la «Gran Negación». Unos y otros se conchaban para que la política sea sólo diplomacia y economía, amén de un sistema de consumo que acaba privatizando lo público, y favoreciendo el despotismo al confundir Estado y gobierno, y cuyo control democrático es un mero ritual.

Gestos coherentes

Hay además otro modo de reforzar la moralidad de la acción política: favoreciendo gestos coherentes. La política confunde al ciudadano cuando se puebla de muchas y buenas palabras a la vez que de gestos incongruentes con esas palabras. En otra ocasión me he referido al valor

pedagógico y la capacidad de ilustración de los gestos para combatir el «cinismo político» de las sociedades no acostumbradas a convivir con las virtudes y vicios de las prácticas democráticas. Pero hay una razón más: los gestos son, por antonomasia, la expresión moral de nuestro tiempo. Como dice Heller, en un mundo de «mínima moralía» se confía menos en las explicaciones universalísticas que en aquellos gestos que universalmente son reconocidos como moralmente plausibles. Los acontecimientos mundiales de los últimos meses nos están aportando testimonios tremendamente plásticos de la ejemplaridad y la capacidad de contagio de esos gestos en favor de la libertad, la dignidad y en contra de las tiranías. Creo, pues, que las filosofías morales en el futuro argumentarán también sus preferencias basándose en gestos de esa naturaleza más que en la esperanza de encontrar un principio básico racionalmente fundamentado y universalmente reconocido.

No es algo baladí, pues, para el enraizamiento de hábitos democráticos y del aprecio ciudadano por la acción política cuidar los detalles, la terminación en toda iniciativa política y respetar las formas. Seleccionar los medios sabiendo que son éstos los que, por lo común, en política determinan los fines, hacer lo posible por disminuir la distancia entre lo que se muestra y lo que se oculta, son los signos de la ejemplaridad de la política. En realidad, hoy en día, son más bien los gestos los que ilustran las palabras. Cuando los grandes proyectos resultan muy alejados de la práctica cotidiana, quien así actúa proyecta de sí mismo no sólo una sombra de perfiles cínicos sino, a la postre, una imagen patética.

4. El despliegue de la democracia

En un país como el nuestro, en el que la mayoría ha tenido tantas dificultades para

poder expresarse, es comprensible, y hasta saludable, que la gente identifique implantación de la democracia con gobierno de la mayoría. La nota distintiva de una democracia, bueno es recordarlo, consiste en que nadie puede proclamarse por sí mismo mejor que cualquier otro. La democracia es, en primer lugar, el régimen que deposita en el *demos* —los ciudadanos en plenitud de derechos políticos— el privilegio de elegir a los mejores y controlar a los poderosos. La democracia, como dice Sartori, es un procedimiento de selección que produce una *poliarquía electiva*, abierta, responsable y controlada por los ciudadanos.

Pero la democracia es también un régimen que favorece la distribución de poder. La democracia, si funciona bien, tiende no sólo a garantizar el control de los gobernantes por los gobernados sino que ampara el pluralismo: de poderes, ideas e intereses. También el conflicto y el disenso constituyen una perspectiva inevitable de la democracia. El reto, para una comunidad, reside en saber convivir con esa realidad conflictiva y en su inteligencia para convertir los conflictos en realidades complementarias. La democracia canaliza las realidades del pluralismo y los conflictos a través de un sistema institucional regulador de la distribución de poderes, y ampara el disenso de las minorías a través de un sistema acordado de reglas para procesar las discrepancias y regular el derecho a discrepar.

No es algo baladí para el enraizamiento de hábitos democráticos y del aprecio ciudadano por la acción política cuidar los detalles.

Democracia como pacto

Si la democracia es control desde abajo y pluralismo, el despliegue de aquélla exige, primero, que vayamos habilitando nuevos registros de control democrático de las distintas instancias donde se administra poder en nombre de los demás, y, segundo, que la capacidad de decidir asuntos que afectan a los otros se encuentre razonablemente distribuida en instituciones y focos diversos de poder. Si el dinamismo de la democracia camina en esa dirección, nos encontramos con la otra dimensión consustancial a la democracia: la democracia como pacto.

Si la imagen de una democracia se representa exclusivamente en la regla de la mayoría, y si esa mayoría es constante, es comprensible que se propague la impresión de que el resultado del ejercicio de la misma es de suma cero. Puede que sea ésta una explicación, si se quiere formal, de por qué ha cuajado en la opinión pública la literatura sobre el monopolio socialista del poder político. Pero lo cierto es que no se ha querido o no se ha sabido desarrollar una cultura del pacto, ni hábitos de reparto de poder y de responsabilidad como virtud de la democracia. El desarrollo de la democracia debe generar áreas de consenso, no por una magnanimidad del que posee todo el poder, sino porque en su despliegue, junto a las reglas de la mayoría, se hacen presentes también la autonomía de corporaciones, la proporcionalidad, las mayorías cualificadas,

El hábito de la solidaridad en la responsabilidad sólo se asume si se es también corresponsable en el ejercicio del poder.

los vetos y las coaliciones. Postular más democracia es, sin paliativos, reconocer el principio de «gobernar con». La capacidad de desarrollar esta dimensión de la democracia es un reto fundamental para el PSOE en estos momentos.

Los socialistas han gobernado hasta ahora transformando la enorme legitimidad de los sucesivos apoyos mayoritarios en una responsabilidad casi exclusiva frente a los grandes objetivos de la normalidad democrática de este país. Han sido tan celosos de su responsabilidad como del poder que tenían para ejercerla. Ello ha tenido una consecuencia perversa: la de alimentar la irresponsabilidad de los otros, y los otros han terminado siendo no sólo la oposición política, sino, a veces, hasta otras administraciones del poder público, representaciones de intereses sociales y la mayoría de los medios de comunicación, todos los cuales se han sentido, con razón o sin ella, con poca capacidad de influencia, y, por ello, con aún menos sentido de la responsabilidad. De ahí a la pendiente del «cuanto peor mejor» sólo había un paso. Así ha cuajado la estrategia actual de una oposición jaleada por buena parte de los medios de comunicación, que, confundiendo su papel en una democracia, no sólo termina fijando el orden del día de las prioridades de la oposición, sino que ejerce su poder, legítimo y necesario, de modo gratuito, sin pagar tributo alguno a la responsabilidad.

Esta situación no se remedia reclamando corresponsabilidad, sino poniendo en pie todo un conjunto de iniciativas que permita recuperar colectivamente esa cultura del pacto. El hábito de la solidaridad en la responsabilidad sólo se asume si se es también, en alguna medida, corresponsable en el ejercicio del poder, creándose así las complicidades básicas entre los actores fundamentales de una sociedad para garantizar su seguridad y su estabilidad. La astucia de la razón socialista se

demostrará ahora en su capacidad de sostener los objetivos estratégicos de completar la modernización y democratización de este país desde las exigencias de la lógica de la cooperación. Hay, pues, que habituarse a repartir la capacidad de decisión, a compartir poder y responsabilidad, primero con las otras fuerzas políticas (lo que supondría un cierto giro en la política parlamentaria), también con otros poderes del Estado (introduciendo en concreto modificaciones en la regulación entre gobierno y poder judicial), y finalmente con los sindicatos y con otras representaciones sociales.

Democracia como representación

Desarrollar la democracia no significa que se pretenda confiar el gobierno de nuestras sociedades, la complejidad de sus problemas y la interrelación de los mismos a una voluntad general formada por millones de personas desagregadas decidiendo a su arbitrio sobre tan diversos y dificultosos asuntos. Se trata más bien de que quienes decidan sean sensibles a las demandas que nacen de abajo y responsables ante los ciudadanos, es decir, que sean *representativos*.

El problema de la democracia está en saber si quienes deciden en cada asunto lo hacen bajo el control de aquéllos a quienes afectan las decisiones. La tradición democrática occidental ha identificado democracia y representación, y ha favorecido, sobre todo desde la segunda posguerra, una tendencia a la despolitización de los ciudadanos, los cuales han delegado, primero en el mercado como máquina de crecimiento y eficacia y, en segundo lugar, en el Estado democrático y las organizaciones sociales la representación de sus intereses, su seguridad y una elemental capacidad de redistribución.

El funcionamiento de este sistema se

Es conveniente para el incremento de políticas responsables de participación estimular la representación social de intereses.

prueba en su capacidad para transformar las demandas sociales en decisiones políticas a través de procesos de negociación. Y aunque, a veces, exista una sobrecarga de demandas que el sistema no parece digerir, no vale como remedio universal apelar ni a una rápida y momentánea civilización ni a una genérica y difusa participación, más bien se trata de intensificar la apertura de espacios diversos de transacción y de pacto. Por eso el progreso de la democracia supone, a la vez, promover políticas de representación y avanzar en la implantación de la cultura del acuerdo como la forma más desarrollada de aquélla.

Voy a referirme a algunas iniciativas concretas que podrían ayudar a crear las condiciones para que la democracia funcione.

Representación social de intereses

Es conveniente para el incremento de políticas responsables de participación estimular la representación social de intereses. Esta se va creando a través de asociaciones que son suministradoras de información, que pueden ayudar al funcionamiento del Estado. Además, si se socializan ciertas decisiones, incorporando a la toma de decisión de las mismas a dichas asociaciones, éstas no sólo comprometen a sus miembros sino que cumplen una función de descarga. El asociacionismo no será relevante en este país a

La debilidad radical del Parlamento reside en la distancia que existe entre las funciones que teóricamente le corresponden y las prácticas parlamentarias.

base de declaración de intenciones, sino en la medida en que el Estado sea capaz de concertar con las asociaciones la ejecución de programas y políticas concretas, y aquéllas estén entrenadas para asumir delegaciones y realizar conciertos con las administraciones públicas en materias que antes estaban reservadas exclusivamente a la competencia y responsabilidad estatales.

Además, atendiendo al tono más racional que preside ahora las relaciones entre gobierno, sindicatos y patronal, es posible que tengan mejor acogida las alusiones al papel que en el desarrollo de una democracia pueden jugar los sindicatos. Estos, más que instrumentos organizados de la defensa de intereses particularizados ya establecidos, deben seguir siendo asociaciones capaces de constituir intereses, además de instituciones a través de las cuales se plantean un conjunto de exigencias a los poderes públicos a los que contribuyen a legitimar. En cualquier caso, el asentamiento de una concepción como ésta requiere progresar en la recuperación, afortunadamente iniciada, de un talante, tanto del gobierno como de los interlocutores sociales, menos dramático que permita reconocer, como corresponde a una democracia normalizada, zonas de confluencia y de divergencia, lo que hará más factible alcanzar, al menos, acuerdos parciales.

Centralidad del Parlamento

El fortalecimiento de la cultura democrática pasa por recuperar la centralidad

del Parlamento. Como decía Weber, nada sospechoso de excesos participacionistas, un Parlamento fuerte es no sólo garantía de las libertades políticas y los derechos civiles, sino también de la práctica de una política responsable y realista. Si los gobiernos se sienten responsables ante el Parlamento, los líderes políticos se reclutan en él y las grandes decisiones se toman en su seno, se acabará con la superideologización y la protesta como cultura política.

Sin duda, el Parlamento sigue siendo el escenario más importante donde se representan las decisiones políticas más trascendentes. Pero por la misma razón es el lugar donde se hace más patente ante los ciudadanos si la voluntad de renovación de una fuerza política es habladería o verdadero reformismo. Pues bien, es, a mi juicio, en la política parlamentaria en la que el PSOE arrastra hoy, a diferencia de hace algunos años, una cierta dosis de pereza reformista. En vez de situarse a la defensiva, al abrigo del tacticismo oportunista de la oposición, debería abanderar el necesario cambio de óptica para hacer del Parlamento una institución más vigorizada y más central. Al bochinche que intermitentemente monta una oposición errática y con escaso sentido institucional, se le debe responder por elevación si se quiere ganar credibilidad y que aumente el aprecio de los ciudadanos por la democracia representativa.

Sin duda, la debilidad radical del Parlamento reside en la distancia que existe entre las funciones que teóricamente le corresponden y las prácticas parlamentarias. Mientras el Parlamento sea, ante todo, un escenario de representación, en el que unos actores «representan» las decisiones que se toman en otro lugar, no avanzaremos mucho. Para recuperar lo más posible la acción parlamentaria en su sentido genuino, el Parlamento, en primer lugar, debe dotarse de medios ade-

cuados para que sus funciones se realicen con la solvencia que requiere la complejidad de los asuntos actuales.

Es verdad que el derecho parlamentario y la acción de los operadores jurídicos que intervienen en la resolución del día a día parlamentario representan una base sustanciosa para que el ideal moral de la democracia y el régimen político democrático cuenten ya con una elaborada ingeniería. Pero es necesario extender la panoplia de recursos técnicos del Parlamento a otras áreas de la actividad social y del conocimiento, como instrumento imprescindible para poder tener un criterio mínimamente competente en asuntos de trascendencia social que demandan respuestas del Parlamento. Pero más importante, si cabe, es que todos esos medios y recursos se conciban, de un modo más decidido y efectivo, como un servicio al parlamentario y a los grupos parlamentarios para que estos tengan toda la información y apoyo técnico necesarios tanto para formar un juicio político como para evaluar las consecuencias de las decisiones que adoptan.

El Parlamento debe afinar su sensibilidad. Al postular que el Parlamento sea más sensible no estoy dando mi conformidad a esa opinión extendida de que el Parlamento no se ocupa de las cuestiones que interesan en la calle. Más bien al contrario, el error es que esas cuestiones se planteen en el Parlamento tal como se recogen en la calle. Así, muchas veces, la oposición enarbola cualquier demanda más preocupada en hacer notoria su condición de portavoz aplicado de la reivindicación de que se trate que interesada en abrir un proceso de negociación entre las fuerzas políticas que depure con rigor esa demanda social y la transforme en iniciativa política que razonablemente pueda ser asumida por la mayoría.

Es cierto que a la tentación de oportu-

nismo e irresponsabilidad de la oposición la mayoría tiende a responder muy defensivamente, cerrándose a veces el paso a la consideración rigurosa y fértil de cuestiones que hubieran merecido no sólo la atención del Parlamento sino una respuesta del mismo racional y políticamente practicable.

También el Parlamento debe ser el espacio privilegiado donde ejercitar y desarrollar la democracia como sistema de acuerdos. En la actual situación es necesario desplegar esta dimensión virtuosa de la democracia. Junto a la regla —de oro— de las mayorías nuestro Parlamento debe recuperar el hábito del pacto y de la transacción, debe hacer visible ante los ciudadanos la potencialidad política de la lógica de la cooperación. Si queremos hacer la vida política más transitable debe producirse una transformación interesante del Parlamento, de tal suerte que éste sea menos un escenario de exhibición demagógica y más un espacio recuperado para el comportamiento responsable y el acuerdo razonable.

Hubo momentos en la corta historia de la democracia en los que nuestro Parlamento fue una escuela de hábitos para el consenso, discreto a la vez que fértil, lo que no obturó la emergencia de alternativas ni de la alternancia. Posiblemente los socialistas, los más veteranos entre los protagonistas de la actual vida parlamentaria, deban tomar la delantera y responder a la impulsiva oposición de hoy ofre-

***El Parlamento debe ser menos
un escenario de exhibición
demagógica y más un espacio
recuperado para el
comportamiento responsable.***

ciéndole áreas de consenso, capacidad de iniciativa propia en asuntos a los que tiene particular querencia como las comisiones especiales. Al infantilismo de la oposición convendría que los socialistas respondieran con una «pedagogía activa» —retándoles a administrar poder y responsabilidad— más que con el paternalismo y el recelo de quien teme, con motivos ciertamente, el derroche irreflexivo de la confianza y la irresponsabilidad.

Pero para que todo esto sea posible hace falta que el Parlamento no sea una realidad políticamente subalterna. Con ello no estoy proponiendo modificaciones sustanciales en la arquitectura legal que regula la función parlamentaria (sistema electoral, regulación jurídica de las relaciones Gobierno-Parlamento) sino que aumente la capacidad de influencia del Parlamento como institución y de los grupos políticos como régimen de encuadramiento de los parlamentarios. El desarrollo de la cultura política democrática, el despliegue de la democracia como concertación y el robustecimiento del Parlamento pasa fundamentalmente porque los partidos, pero muy especialmente el PSOE, residencien buena parte de sus iniciativas políticas y de sus proyectos de renovación en su representación parlamentaria. Esto significa, en el caso del PSOE, más que innovar recuperar una tradición que remonta a las primeras legislaturas, en las que el reclutamiento de los cuadros parlamentarios atendía, más que hoy, a criterios de competencia y

capacidad políticas, en los que una estrategia parlamentaria más imaginativa, más viva e ilusionante estimulaba una actividad política de excelencia y participativa.

Sería un insensato si no reconociese que aquéllos eran tiempos de oposición, pero la realidad evidente es que el pulso parlamentario del PSOE es débil, y ello es así porque la referencia parlamentaria es políticamente más subalterna de lo que fue, y de lo que, a mi juicio, debería ser. En este caso, la experiencia del pasado es una lección para la renovación del futuro. Si centramos la vida política en el Parlamento, si los cuadros políticos más relevantes desarrollan su actividad más notoria en el mismo y si, en definitiva, desplazamos al Parlamento buena parte de la capacidad de influencia política, no sólo se robustecerá aquél sino que se revitalizará toda la acción política democrática.

5. Renovar las políticas

Una de las ideas maestras de la oferta electoral socialista para los próximos años es la necesidad de rematar el proceso de modernización de este país. Para ello se proponía, a mi juicio con acierto, tanto continuar unas políticas como renovar otras. Pretendo ahora solamente señalar algunos frentes donde es conveniente incidir con un cierto talante renovador.

Debate racional de opciones económicas

En primer lugar, las políticas económicas, industriales y tecnológicas son definitivas no sólo para determinar el modelo de desarrollo económico sobre el que transitamos sino algo más concluyente: de dichas políticas depende el resultado final de este proceso de modernización, es decir, cuál va a terminar siendo la morfo-

Sobre política económica ni los partidos ni los agentes sociales han alentado un debate prospectivo sobre opciones a medio plazo.

logía productiva de nuestro país, y el perfil de los actores económicos más influyentes, la competitividad internacional, el nivel de autonomía y la capacidad de reacción de España en el concierto económico transnacional. Sobre estas políticas conocemos intervenciones y explicaciones de coyuntura, así como sus resultados y, en todo caso, la proyección que de los mismos puede hacerse para el futuro inmediato, pero se echa en falta un horizonte de decisiones estratégicas. Quizá eso ocurre porque sobre política económica —y no digamos sobre economía política— ni los partidos ni los agentes sociales más representativos han alentado un debate prospectivo, documentado, no ya teórico sino político, sobre opciones a medio plazo.

Ocurre con el conocimiento económico en nuestro país que existe un desequilibrio insoportable entre gente no experta y expertos sin poder, por un lado, y el enorme poder y capacidad de iniciativa de una élite particular de tecnoexpertos por otro. Estos últimos controlan magistralmente, desde hace muchos años, el circuito de información privilegiada y especializada que desemboca en los responsables políticos del gobierno, los cuales se ven abocados a tomar decisiones entre las limitadas opciones que les ofrecen esa minoría de expertos. Esta élite permanente ni es sensible a las demandas generales, ni tampoco es especialmente representativa de la comunidad científica especializada, de cuya solvencia se tiene a sí misma por referente de excelencia. Es, más bien, representativa de una ideología, de unos intereses tan respetables como cualesquiera otros, pero no por ello merecedora de una posición tan ventajosa.

No se trata de renunciar a la solvencia del especialista, sin la cual es imposible actuar con un mínimo de racionalidad y eficacia, sino de rescatar la discusión sobre políticas económicas del oscuran-

***Politizar las grandes decisiones
y profesionalizar su ejecución
puede ser un lema aconsejable
para las políticas de reforma de
la Administración.***

tismo en que esa particular sofocracia tecnológica la tiene secuestrada, forzando un debate racional, abierto, no demagógico pero socialmente comprensible, sobre opciones económicas, modelos de crecimiento y sobre las nuevas concentraciones de poder económico. De este modo, a lo mejor es posible que los argumentos de unos y otros puedan liberarnos de este acogotamiento que en materia económica padecemos los indocumentados en esta materia y por el cual en economía todo lo que se nos propone es necesario y lo necesario virtuoso.

Reforma de la Administración

Lograr que el Estado termine representando una administración racional y eficiente de los recursos públicos y de las decisiones que los representantes democráticos toman es, hoy en día, casi una utopía, racional si se quiere, pero utopía a fin de cuentas. Pareciera como si sobre la reforma de la Administración estuviésemos condenados a expresar nada más que buenas intenciones. Pero lo cierto es que dicha reforma sigue siendo el otro pilar básico de nuestro proyecto de modernización. Sólo quiero expresar un criterio sobre la relación entre decisiones políticas y administración, cuyo desarrollo pragmático y normativo podría contribuir, sin duda, a mejorar el endeble acoplamiento entre burocracia y eficiencia.

Es un hecho que los Estados y las ad-

El debate sobre la conveniencia del salario social, o sobre una asignación social garantizada, ni debe despreciarse ni darse por zanjado.

ministraciones públicas se ven abocados a intervenir cada vez más en procesos de toma de decisión de muchos y variados asuntos, sin que esa presencia de lo público aumente o disminuya en razón de las preferencias ideológicas de los gobernantes de turno: simplemente es un dato de nuestro tiempo. Un criterio plausible de orientación general podría ser el que las decisiones relevantes que afecten a los intereses de la colectividad sean decisiones verdaderamente políticas, es decir, tomadas por órganos responsables, representativos, que de un modo directo o indirecto deban dar cuenta a sus representados de las razones de su determinación. Pero, a la vez, la ejecución de dichas resoluciones por los órganos de la Administración Pública debería producirse de un modo totalmente profesionalizado. Politizar las grandes decisiones y profesionalizar su ejecución puede ser un lema aconsejable para las políticas de reforma de la Administración.

Pero el éxito de esa profesionalización propuesta reside en la capacidad de encontrar instrumentos y afrontar reformas legislativas que permitan agilizar y optimizar la gestión. Hemos dicho en otra ocasión que eso sólo será posible si la Administración introduce incentivos competitivos y asume en la lógica de su funcionamiento las exigencias de una racionalidad técnica y económica. Al razonamiento de entonces apporto en esta ocasión la autoridad de Bruno Trentin, senador del PCI y secretario general de la

CGIL. Dice textualmente: «Es necesario liberalizar el acceso a la Administración Pública comenzando por los puestos dirigentes, con contratos a plazo a managers de especial capacidad y experiencia». Afirma también Trentin que el hecho de que en la Administración Pública no exista el despido le parece una situación aberrante y continúa: «El camino de salida no puede ser otro que el de avanzar gradualmente hacia una privatización, una liberalización de las admisiones, desde la base de selecciones rigurosamente profesionales. Además hay que crear una escuela de Administración Pública digna de este nombre y establecer una relación de trabajo en el cual para ir adelante no baste ya con la simple antigüedad» (*Leviatán*, 35). No me atrevo a pedir que el ánimo de este dirigente sindical italiano sea emulado por los dirigentes sindicales de este país pero sí, al menos, por los responsables de acometer la tarea aún pendiente de una reforma a fondo de la Administración.

Mejorar las políticas de integración

Una sociedad como la española, que se parece cada vez más a las de su entorno europeo, disfruta de sus ventajas pero también padece, incluso de un modo más acentuado, sus disfunciones. Una de las más graves es la que produce el proceso de dualización social, la consolidación de sectores sociales cada vez más amplios que viven en los bordes del sistema o incluso fuera de él.

Lo que social y políticamente significa la consolidación de bolsas de pobreza en el entorno de nuestras sociedades es fundamentalmente la exclusión de la participación económica y social de una parte de la población. La presión de estos sectores sociales reside no en lo que hacen sino en lo que sufren, no en lo que tienen sino en la privación. Lo que da fuerza a su pro-

testa es su indigencia y su exclusión. Por eso cuando sus demandas no encuentran cauce en la política o bien se repliegan peligrosamente en guetos de una larvada potencialidad explosiva, o bien se refugian en comunidades éticas o religiosas que terminan dando a la protesta forma de sentimientos y movimientos morales o religiosos (Touraine).

En 1989 el número de desempleados en Europa superaba los 14 millones y, sin entrar en polémicas de cifras, en España el número de personas en situación de pobreza severa por razón de nuestro retraso se eleva a proporciones más preocupantes que en la mayoría de los otros países europeos. De ahí que las políticas de integración deban constituir una prioridad fundamental si no queremos que esa cara oculta de nuestro crecimiento termine abriendo grietas de deslegitimación en lo que ha sido un importante salto adelante en la modernización de España.

La protección social de la necesidad, la garantía de un mínimo de seguridad vital estuvo en la base de todas las políticas de integración social, desde las *Poor Laws* hasta el Estado de bienestar. Y, hoy en día, tanto en las demandas contenidas en el informe elaborado por la CES como en lo expresado en el de la OCDE y en el borrador de la *Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales*, la garantía social de protección es algo universalmente reconocido, aunque la concepción, la forma de regulación y la financiación de este derecho sea una cuestión disputada.

El problema en nuestro país es que, a pesar del esfuerzo realizado, las políticas de protección y reinserción social son todavía redes muy frágiles, y ello hace que la discusión sobre cómo mejorar esas políticas se quiera, a veces, eludir, o bien se transforme en pasto para la retórica y la demagogia.

A mi juicio, el debate sobre la conveniencia del salario social, o sobre una asignación social garantizada o salario ciudadano, ni debe despreciarse ni darse por zanjado: más bien, al contrario, debería abrirse, rigurosamente, planteando no sólo las diferencias de concepción que sobre el mismo existen, sino los graves problemas de financiación que cualesquiera de las soluciones a las que se arribe terminan encontrando. Pero lo que no debe hacerse es confundir los planos y plantear problemas de concepción para encubrir dificultades objetivas de financiación y de gestión o, por el contrario, plantear problemas de financiación, cuando simplemente por razones ideológicas no se está a favor de acabar con la dualización de la sociedad.

Me parece, en cualquier caso, que la polémica debería huir del simplismo expeditivo y el maniqueísmo en que a veces se expresa. La lucha contra la pobreza debe insertarse en una política más global, siendo conscientes de que la dualización de la sociedad no se termina venciendo sino en el horizonte de una nueva concepción del reparto del trabajo y distribución de la renta, y que una orientación de iniciativas factibles en el presente debe relacionar renta mínima, medidas de inserción y derecho al trabajo. En este sentido se podía ir avanzando en programas mixtos en los que la extensión y aumento progresivos de los niveles de protección e ingresos mínimos garantizados fuesen unidos a la contraprestación

Aislar la política es la pretensión de los conservadores; el impulso de la izquierda debe ser el de socializar la política.

de una actividad social útil, iniciativas de integración tales como programas formativos de reinserción, realización de trabajos o actividades de utilidad social que comprometan al beneficiario a salir de su situación de marginación. Pero mientras tanto, y tal como expresaba no hace mucho José María Maravall, resulta una prioridad inaplazable aumentar la proporción del gasto social en el conjunto del gasto público total para que «el reformismo signifique la representación de excluidos y marginados» (*Leviatán* 37).

6. Epílogo: abrir las puertas del partido

Desde Michels y Rosa Luxemburgo hasta hoy no han variado mucho las desviaciones de las organizaciones políticas. A medida que progresan las posibilidades electorales y se ensancha el espectro de representación de un partido se observa una pérdida de radicalidad, cierta erosión de la identidad colectiva y una desactivación de sus miembros. Desde una consideración orgánica las tentaciones suelen ser la oligarquización, la dominación del partido por los profesionales y ejecutivos, o el sometimiento a los impulsos del liderazgo carismático que comentaba Weber.

Con independencia de cómo crea cada cual que esos vicios aquejan a nuestros partidos en España, y al PSOE en particular, me inquieta, sobre todo, que se esté apoderando de la organización socialista una sensación de aislamiento, percibida a

Hay que abrir las puertas de los partidos a electores y simpatizantes para que éstos puedan condicionar sus políticas.

veces incluso como acorralamiento. De ahí que el signo de la renovación interna venga, a mi juicio, de la mano de la apertura. Ante la presión de una opinión pública que en buena parte es compulsivamente antisocialista, la inclinación más fácil, aunque equivocada, es el repliegue. Aislar la política es la pretensión de los conservadores, mientras que el impulso de una izquierda no conservadora debe ser el de socializar la política. En un momento en el que sólo queda en pie como proyecto de progreso el socialismo democrático, y en un país donde los portavoces de este proyecto reciben de nuevo un respaldo popular muy importante, no cabe otro camino para resolver los viejos y nuevos problemas que autotrascenderse. Este será el síntoma de la fortaleza como organización y el modo más seguro de garantizar su sensibilidad a las inquietudes y demandas que vienen de fuera.

Acoger a todo aquél que se reclame de la tradición de izquierda y hacer que se sientan cómodos en el seno del partido constituye una responsabilidad tras el derrumbe del comunismo. Reconocer al socialismo democrático como la única posada para un proyecto factible de emancipación no es una pretensión arrogante y exclusivista sino el resultado final de la azarosa historia de la cultura de izquierdas y una evidencia tan tozuda como la de los hechos. Hay que tender puentes también a esa izquierda sumergida, como la llamaba, hace poco, Flores D'Arcais, formada por asociaciones y movimientos que desarrollan iniciativas solidarias compuestas por ciudadanos que quieren volver al compromiso político sin convertirse por ello en políticos de jornada completa.

Una de las cosas que más desvelos produce en los partidos, que peor sabor deja y que menos problemas resuelven son las disputas internas, circunscritas por lo general a intereses exclusivos de los

miembros de la organización. En esa pugna, como ha recordado Offe, suele haber «factores latentes» —el reparto del poder interno— y factores manifiestos que se realimentan con apelaciones de principios y exigencias especialmente drásticas que suelen tener acogida en la opinión pública, máxime si las proposiciones se plantean en una forma límite. Las direcciones de los partidos, empeñadas en mantener el *statu quo* reaccionan, por lo común, con la amenaza disciplinaria. Sin embargo, la clave del éxito en la resolución de estos conflictos endogámicos y muchas veces estériles está en la capacidad que se tenga de desdramatizarlos y de reconducirlos a su dimensión real, que suele ser el deseo, razonable en muchos casos, de otro reparto del poder interno, y no tanto una preocupación trascendente por los fundamentos. Esta reconducción de los conflictos será posible en la medida en que se logre un reconocimiento real y una regulación aceptable del pluralismo, lo que debe ir acompañado, al mismo tiempo, de la aceptación por todos de una lealtad básica compartida y el respeto a las reglas de juego.

Pero la cuestión de la democracia interna de los partidos no se resolverá dando vueltas al reparto de la influencia interna de los militantes, sino rompiendo el cierre organizativo de los partidos, abriendo las puertas del mismo a electores y simpatizantes no inscritos para que éstos puedan condicionar sus políticas. Se trata de inventar formas de organización ágiles, capaces de hacer sitio a la influencia de aquéllos que simplemente simpatizan con un partido y pueden (y quieren) dedicar a ese partido ratos de su tiempo libre.

Avanzar en esa dirección es la única posibilidad fértil de lograr un partido vivo, plural y poblado, fuerte en resumidas cuentas. Todas nuestras cuitas sobre el papel subalterno del partido en la determinación de las políticas reales —su escasa capacidad para articular políticamente intereses diversos y transformar demandas sociales en reformas políticas— se quedarán en lamentaciones y susurros pusilánimes si no nos adentramos mar adentro, si no nos aventuramos a reparar a la intemperie y a renovar en alta mar.